

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO (JUNIO 18 DE 2020)**

**OBJETO:** CONCEPTUAR SOBRE LA CONTRATACIÓN SUSCRITA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO-VALLE DEL CAUCA, CON OCASIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN ESE MUNICIPIO

*En el numeral 5 del artículo 4 y en el artículo 58 de la Ley 1523 de 2012, se define la calamidad pública como: “Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción”.*

Así mismo, la aludida Ley 1523 de 2012, define específicamente el término desastre, en la forma que debe ser comprendido para el desarrollo de la materia que regula la norma, así:

*“Artículo 55. Desastre. Para los efectos de la presente ley, se entiende por desastre el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.”*

Por su parte, el artículo 66 de la norma en comento, estableció las medidas especiales de contratación para los contratos celebrados en pro de la ejecución de actividades de respuesta y reactivación de las zonas afectadas por la calamidad pública, y así mismo dispuso que tales contratos deben ser sometidos al control fiscal dispuesto para las declaratorias de urgencia manifiesta en los términos de los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, tal como se cita:

*“Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo **o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo**, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.*

*Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen”.*

Ahora sobre la figura de la Urgencia Manifiesta, en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se concibe como:

*“Artículo 42º.- De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o*

120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

*constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.*

*La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.*

*Parágrafo.- Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.”*

Así mismo el artículo 43 de la precitada norma, impuso el deber a las autoridades administrativas de enviar el expediente contractual abierto con ocasión de la urgencia manifiesta y los actos administrativos que dieron lugar a ello, a los entes de control fiscal:

**“Art. 43 Ley 80 de 1993. Del Control a la Urgencia Manifiesta.** *Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas y de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración.*

*Si fuere procedente dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.*

*Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia”.*

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, estableció las modalidades de selección de contratistas, dentro de las cuales contempló la contratación directa, determinando los casos en que procede tal modalidad:

**“Artículo 2°. De las modalidades de selección.** *La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:*

*(...)*

**4. Contratación directa.** *La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:*

*a) Urgencia manifiesta;*

*b) Contratación de empréstitos;*

*(...)*

**Parágrafo 1°.** *La entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar.*

*(...)*

Por consiguiente, se procede a realizar el estudio de la situación que conllevó a la contratación que se relaciona en este documento.

## **I. ANTECEDENTES**

1. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus», en la cual se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19.

2. A raíz de la declaratoria del ministerio de salud, El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) del municipio de Trujillo - Valle, como consta en acta 05 de reunión extraordinaria realizada el 24 de Marzo de 2020, sesionó a efectos de tratar el problema de salud pública por el que atraviesa el país con ocasión a la pandemia por el virus llamado coronavirus (COVID-19), y la forma de cómo hacer frente en ese municipio si llegara dicho virus a esa municipalidad; llegando a la conclusión el CMGRD que era necesario tomar las acciones necesarias para la prevención, contención y mitigación de la Pandemia del Coronavirus COVID-19 en esa localidad vallecaucana.
3. A raíz de lo concertado en la reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) del municipio de Trujillo Valle, la primera autoridad municipal resolvió dar aplicación al régimen especial para situaciones de Calamidad Pública, por tal motivo se declaró esta mediante Decreto 200-02.01-0065 del 24 de marzo de 2020 contemplado en el capítulo VII de la Ley 1523 de 2012.
4. Con el propósito de dar trámite a los procesos de contratación directa que se requerían para atender la calamidad publica decretada con ocasión del virus COVID-19, fue declarada la urgencia manifiesta en el municipio de Trujillo, mediante Decreto N° 200-02.01-0069 del 02 de abril de 2020 apoyándose en artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993.
5. Con fundamento en la situación calamitosa, se suscribieron seis (6) contratos por valor total de \$36.725.450, cuyas características generales son como se exponen:

<b>Contratista</b>	<b>No. de contrato</b>	<b>Duración</b>	<b>Objeto del contrato</b>	<b>Valor del contrato.</b>
SOLTEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEL VALLE SAS	SGM-S-052-20 03/04/2020	15 días	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRUJILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA SOCIAL Y ECOLÓGICA CAUSADA POR EL COVID-19	\$11.000.000,00
MONICA NOREÑA GONZALEZ	DLS-PS045-20 20/03/2020	60 días	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA. (COVID 19)	\$ 3.440.000,00
MAYRA ALEJANDRA CARDONA GRAJALES	DLS-PS046-20 20/03/2020	60 días	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA. (COVID 19)	\$ 3.440.000,00
DANIELA GIL BENITEZ	DLS-PS047-20 24/03/2020	60 días	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA. (COVID 19)	\$ 3.440.000,00

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

DEYSI J. SANTA QUINTERO	DLS-PS048-20 26/03/2020	60 días	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA. (COVID 19)	\$ 3.440.000,00
ALEXANDER AVILA RAMIREZ	DLS-PS-055-20 21/04/2020	Prestación de Servicios	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA	\$11.965.450,00

6. Allegado mediante correo electrónico a la CDVC el 20 y 21 de abril de 2020, los antecedentes administrativos de la actuación que motivaron la declaratoria de calamidad pública y la urgencia manifiesta.
7. Por lo que, dentro del término de dos (2) meses la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir el pronunciamiento a que haya lugar de conformidad con lo previsto en artículo 43 de la ley 80 de 1993.

**II. DE LOS HECHOS Y CIRCUNTANCIAS QUE MOTIVARON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA.**

Respecto de los actos administrativos mediante los cuales se declaró la calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta, en ellos se determinó su motivación bajo argumentos que contemplan las circunstancias y hechos que dieron lugar a la calamidad y al uso de la figura de urgencia manifiesta, en los siguientes términos:

“(…)

*Que la ley 1523 del 2020 “por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres se establece el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres y se dictan otras disposiciones”, indica en su artículo primero que: “la gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión de riesgos de desastres es un proceso social orientado a la formulación ejecución seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes programas, regulaciones ,instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento de la reducción del riesgo y para el manejo de desastres propósito explícito de contribuir a la seguridad el bienestar y la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”.*

*Que la responsabilidad de la gestión del riesgo de desastres es de las autoridades locales de todo el territorio colombiano.*

*Que el alcalde municipal de conformidad con lo expuesto en el artículo 12 ibidem tiene plena competencia para adoptar las medidas necesarias a fin de conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción, asimismo tiene el deber de informar a la población sobre: posibilidades de riesgo gestión de desastres, acciones de rehabilitación y reconstrucción entre otras.*

*Que el 11 de marzo del 2020 la organización mundial de la salud declaró como pandemia el brote del covid-19.*

**120.08.03**

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

*Que el día 12 de marzo del 2020 el ministerio de salud y protección social mediante resolución No.385, declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19 y adopta medidas para hacerle frente.*

*(...)*

*Qué el Departamento del Valle del Cauca, emitió el decreto 1-3-0666 de fecha 12 de marzo del 2020, mediante el cual dicta medidas de protección y control para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus covid-19, instando a los alcaldes de los municipios pertenecientes al departamento adoptar medidas.*

*(...)*

*qué día 23 de marzo del 2020 fue confirmado por parte del Instituto Nacional de Salud el primer caso de covid-19 en el municipio de Trujillo.*

*Qué en razón a lo anterior y con el fin de tomar medidas preventivas de contingencia para enfrentar el potencial peligro, se convocó de manera extraordinaria al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (CMGRD), con el fin de que se evaluará la viabilidad de declarar la calamidad pública del municipio de Trujillo.*

*(...)*

*Que esta amenaza, puede generar grave daño en personas en situación de vulnerabilidad, afectando la salud, la vida y bienes, servicios entre otros, por lo que se busca emprender acciones que permitan mitigar o prevenir la propagación del virus, situación que requiere por parte de la administración una respuesta clara y oportuna, por lo que se requiere de igual forma un fortalecimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria para atender una eventual contingencia de salud pública, para así garantizar el servicio esencial en salud y procurar minimizar los efectos de la pandemia del covid-19.*

*Que en toda situación de desastre o calamidad pública como la que hoy enfrenta todo el territorio nacional con ocasión del COVID 19, deberá prevalecer el interés general sobre el particular.*

*Que la no observancia la situación actual y la posibilidad de propagación del COVID 19 en el municipio de Trujillo, conforme a lo estipulado en el acta 05 del 24 de marzo del 2020 del CMGRD, se hace necesario declarar la calamidad pública en el municipio de Trujillo Valle del Cauca. (...)"*

*El Decreto No. 200-02.01-0069 del 02 de abril de 2020 "Por medio del cual se Declara la Urgencia Manifiesta...", tuvo como relevante las siguientes consideraciones:*

*(...)*

*Que mediante decreto número 200-02.01-0065 en marzo 24 de 2020 el alcalde municipal declaró el estado de calamidad pública en el municipio de Trujillo- Valle del Cauca, con ocasión de la emergencia generada por el COVID- 19.*

*Qué el consejo municipal de gestión de riesgo en reunión del 2 de abril del 2020, aprobó el plan de acción de calamidad pública declarada en municipio de Trujillo Valle del Cauca mediante decreto 200-02.01-0065 en marzo 24 de 2020.*

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

*Que el artículo 7 del decreto N°.440 del 20 de marzo del 2020, "por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19" establece:*

*Artículo 7. Contratación de urgencia con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a la declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizarle la hora en necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente"*

*Que a las circunstancias antes anotadas, le es procedente declarar la urgencia manifiesta con fundamento en el artículo 42 de la ley 80 de 1993, el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2. 1.2 1.4.2 del decreto 1082 de 2015, y el artículo 7 del decreto 440 del 2020, para dar trámite de los procesos de contratación directa que se requieran para atender la calamidad pública decretada con ocasión en la emergencia presentada por el COVID-19.*

*(...)"*.

**III. DE LOS DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DE PRUEBA CON BASE EN LOS  
CUALES SE EMITE EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO**

Para el efecto de este concepto, abordaremos los documentos que se allegaron al organismo fiscalizador, sobre el contrato que se ejecutó con cargo al presupuesto municipal de Trujillo-Valle del Cauca, como aparece glosadas en la correspondiente carpeta a saber una carpeta, así:

1. Copia Decreto N° 200-02.01-0069 del 02 de abril de 2020 *"Por medio del cual se Declara la Urgencia Manifiesta"*
2. Copia Decreto N° 200-02.01-0065 del 24 de marzo de 2020 *"Por medio del cual se Declara la Calamidad Publica en el municipio de Trujillo"*
3. Copia del ACTA N°06 del 02 de abril de 2020 de la reunión extraordinaria del CMGRD.
4. Copia PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA EMERGENCIA COVID-19.
5. Copia del contrato N° GSM- S052-20 del 3/04/2020 anexo registro presupuestal y acta de inicio.
6. Copia del contrato N° DLS-PS55-20 anexo registro presupuestal y acta de inicio.
7. Copia del contrato N° DLS-PS045-20 de 20/03/2020 anexo registro presupuestal; acta de inicio del contrato y comunicación al supervisor
8. Copia del contrato N°DLS-PS046-20 de 20/03/2020; 202 anexo el certificado del registro presupuestal; acta de inicio del contrato, aviso a la comunidad hacer veeduría a la contratación y comunicación al supervisor
9. Copia del contrato DLS-PS047-20 de 24/03/2020 anexo el registro presupuestal; acta de inicio del contrato; aviso a la comunidad hacer veeduría a la contratación y comunicación al supervisor.

**120.08.03**

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

*10. Copia del contrato DLS-PS048-20 de 26/03/2020 anexo acta de inicio del contrato; aviso a la comunidad hacer veeduría a la contratación y comunicación al supervisor.*

**IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

Sea lo primero advertir que este pronunciamiento se hace de manera objetiva, guardando con rigor los principios establecidos en el canon 209 de la Norma Superior, en los cuales se desarrolla y fundamenta la función administrativa, considerando para tal propósito únicamente la prueba documental allegada a la Contraloría Departamental del Valle, consistente en los antecedentes administrativos que dieron origen a la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta por parte del Alcalde Municipal de Trujillo Valle del Cauca y los actos contractuales que para conjurar la misma se celebraron.

Para el efecto se requiere practicar un estudio sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad legal vigente que regula la materia de situaciones de calamidad pública y desastres en Colombia.

Así se tiene que, partiendo del hecho que la máxima autoridad administrativa del Municipio de Trujillo, procedió a realizar la actividad contractual bajo el sustento de los Decretos N°.065 del 24 de marzo de 2020 por medio del cual se declara la calamidad pública en el municipio de Trujillo Valle y como consecuencia de este se promulgo el decreto N°069 de abril 03 de 2020 el cual declara la urgencia manifiesta en el municipio invocando para cada uno la Ley 1523 de 2012 y la Ley 80 de 1993, respectivamente, como regímenes especiales para proceder a la práctica de la contratación directa

Como primera medida se hace necesario citar a continuación el articulado respectivo de la Ley 1523 de 2012 para su análisis:

**“LEY 1523 DE 2012  
(Abril 24)**

***Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones***  
(...)

*Artículo 57. Declaratoria de situación de calamidad pública. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de (sic) situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre.*

En cuanto a la declaratoria de situación de calamidad pública, el artículo 57 de la norma en comento establece que el Alcalde municipal podrá proferir el decreto que la declara, siempre y cuando cuente con el concepto favorable del CMGRD del municipio requisito que en este caso sí se cumplió; como consta en acta de fecha febrero 6 de 2020.

Ahora, es importante determinar el cumplimiento del artículo 59 de la norma, respecto a la adopción de los criterios para la declaratoria de la calamidad pública, a saber:

(...)

*Artículo 59. Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:*

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

*1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas.*

*2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños.*

*Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica.*

*3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres.*

*4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse.*

*5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia.*

*6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta.*

*7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico.*

*(...)"*

De acuerdo con el enunciado normativo citado, se tiene que las razones aducidas por el alcalde municipal para declarar la Calamidad Pública, se encuentran justificadas, pues éstas se encaminaron a proteger la salud y vida de los habitantes del municipio de Trujillo que se encuentran amenazados por la pandemia que agobia los cinco continentes incluido el territorio Colombiano y de lo cual no se requieren pruebas, pues se han expedido alertas nacionales por el Ministerio de Salud y son de público conocimiento como dejaron registrado en el acta extraordinaria los miembros del CMGRD en fecha marzo 20 de 2020, este evento es calificado como calamitoso, con unas consecuencias graves de mortalidad en la población donde los más vulnerable son los adultos mayores, por lo que bajo estos argumentos se motivó el acto administrativo de declaratoria de calamidad y urgencia manifiesta, al ser una amenaza a la salud pública y que pueden trastornar el orden económico y social de ese municipio según da fe el acta de la Reunión Extraordinaria de Gestión Municipal del riesgo de esa municipalidad, recordemos que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020, el virus COVID-19 como una pandemia, lo cual de llegar afectar a la población de ese municipio o cualquier otro municipio puede producir unas consecuencias graves, como lo exige la norma para decretar la calamidad.

El Alcalde Municipal de Trujillo no hizo uso del fondo para atención de calamidad pública de que trata la Ley 1523 de 2012, y por tal razón invocó la figura de la urgencia manifiesta de que tratan los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 para afectar el sistema de contratación que llevó a cabo con los recursos públicos del presupuesto del municipio lo que se encuentra acorde con la norma, tal como se trata seguidamente.

En este punto considera el Despacho oportuno recordarle a la primera autoridad municipal de Trujillo- Valle, que tal como lo establece la Ley 1523 de 2012, debe crearse el fondo de atención para calamidades públicas, de ésta forma no se afecta directamente el presupuesto

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

del municipio con la actividad contractual, sino el presupuesto autónomo del aludido fondo, conforme lo establecido en el artículo 66 que prescribe:

*“Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993”.*

De conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, como regla general y expresión del principio de transparencia, la selección del contratista se celebra a través de licitación, Selección Abreviada, concurso de méritos, o mínima cuantía, según sea el caso. No obstante, el mismo cuerpo normativo prevé algunas excepciones que permiten contratar directamente, como en el caso de la urgencia manifiesta<sup>1</sup>.

*“La Urgencia Manifiesta es una figura precontractual valida de uso extraordinario o excepcional y se refiere básicamente a la necesidad de darle continuidad al servicio o precaver daños a la Administración o a los administrados ante la ocurrencia de eventos imprevistos de tal forma que concurren alguna de las causales previstas en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, que dispone que esa figura tiene aplicación en los siguientes casos:*

- 1. Cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro.*
- 2. Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción.*
- 3. Cuando se trata de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden situaciones inmediatas.*
- 4. Cuando se trate de situaciones que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección”.*

Ahora bien, las alteraciones de la normalidad que constituyen el régimen de excepción, son únicamente las previstas en la Constitución, a saber:

- Guerra exterior (estado de guerra exterior).*
- Grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades de policía (estado de conmoción interna).*
- **Perturbaciones graves e inminentes, del orden económico, social y ecológico del país, o hechos que constituyan grave calamidad pública** (estado de emergencia).*

Y precisamente en Colombia, el presidente de la República expidió el Decreto N°417 de marzo de 2020 y el N°637 del 6 de mayo de 2020, *Por los cuales se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional para atender la pandemia del COVID-19 en el país”.*

Es así y a efectos de emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda se tendrá en cuenta inicialmente que la urgencia manifiesta es un mecanismo excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios con el propósito de enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en razón de circunstancias de conflicto o de crisis, son del todo imposible

---

<sup>1</sup> Artículo 2 Numeral 4 Literal A ley 1150 de 2007

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

celebrarlos a través de la licitación pública, concurso de méritos es decir cuando la administración no cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas”.

Como bien se colige de la anterior definición, la ley señala unas exigencias específicas a la Administración para proceder a la declaración de la urgencia manifiesta, como son; las circunstancias o hechos excepcionales que le dan origen y la imposibilidad de acudir al mecanismo de la licitación pública o al trámite legal establecido para la contratación porque no cuenta con el plazo indispensable para adelantar el procedimiento ordinario de escogencia de contratistas.

El artículo 41 de la ley 80 de 1993 literal 3 dispuso:

*“En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante”.* (subrayas fuera de texto)

En la ley en cita, en el párrafo del Artículo 42 establece:

*“PARÁGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”.*

Es necesario, esgrimir que Artículo 7° del Decreto 440 de 2020, expresa que el hecho que da lugar a la declaratoria de la urgencia se entiende probado, tal como a continuación se observa:

*“Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud . Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se registrarán por la normatividad vigente”.*

De igual modo, se expresa frente al tema en el Artículo 7° del Decreto 537 de 2020

*“Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión la declaratoria de estado de Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio de Salud y de Protección Social y en los términos del artículo 42 de Ley 80 1993, se entiende comprobado hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicio, o la ejecución obras en el inmediato futuro, con objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se registrarán por la normatividad vigente.*

*Las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa bienes y servicios enunciados en inciso anterior.”*

Por su parte, dicho Decreto adicionó los incisos del párrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el siguiente sentido:

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

*“Artículo 8. Adiciónese los siguientes incisos al párrafo del artículo 40 Ley 80 de 1993, Adición y modificación de contratos estatales. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación la situación emergencia con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, podrán adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal deberá justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación emergencia.*

*Igualmente, esta disposición se aplicará a los contratos que se celebren durante la vigencia de Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, y durante el término que dicho estado esté vigente.”*

Frente a la Urgencia Manifiesta, el Consejo de Estado ha sido claro en expresar que se permite la suscripción de contratos mediante contratación directa encaminados a superar la crisis, tal como se observa en Sentencia del 28 de junio de 2019, Consejero ponente Dr. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Radicado 11001-03-26-000-2012-00002-00:

*“(…) Lo primero que debe indicarse, es que el ejercicio del control fiscal es una función constitucional asignada a la Contraloría General de la República por mandato expreso del artículo 267 Superior, que la define como la vigilancia de la gestión de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, la cual se efectúa en forma posterior y selectiva de acuerdo con los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.*

*Dicha función no es ajena al mecanismo excepcional de contratación previsto en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta, regulada en los artículos 41 a 43 de la Ley 80 de 1993, que permite la celebración de los contratos necesarios para superar situaciones de crisis, cuando en virtud de aquellas es del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública o la contratación directa<sup>2</sup>.*

Al respecto se resalta el contenido de los artículos 42 y 43, que en su tenor literal rezan:

*“[...] ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. <Aparte tachado derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos.*

*La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.*

*PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente. [...]”*

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C, sentencia del 7 de febrero de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado nro. 11001032600020070005500.

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

*“[...] ARTÍCULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE URGENCIA. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.*

*Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia. [...]”*

(Se destaca)

*Acorde con las disposiciones transcritas, la urgencia manifiesta (i) debe ser declarada mediante acto administrativo motivado, (ii) contener las razones para acudir a este instrumento excepcional y hacer referencia a los contratos que se suscribirán, señalando su causa y finalidad.*

*Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que “[dada la mayor autonomía con que se dota a las autoridades administrativas, para afrontar situaciones de urgencia y excepción, la vigilancia sobre las actuaciones que se deriven de su declaratoria, deberá ejercerla el organismo de control de manera especial e inmediata, según lo establece el artículo 43 de la Ley 80 de 1993. [...]”.*

*En ese orden de análisis, la Sala encuentra que la competencia por parte de la autoridad encargada del control fiscal, en el marco de la declaratoria de la urgencia manifiesta, se circunscribe a hacer la correspondiente verificación jurídica, que a su vez habilita al mismo ente de control para ejercer las funciones a su cargo, así como las asignadas a la Procuraduría General de la Nación, las cuales detentan la vigilancia de la gestión contractual, según lo establece el Título VII de la Ley 80 de 1993, en particular los artículos 62 y 65 ibídem, que disponen:*

*“[...] ARTÍCULO 62. DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. La Procuraduría General de la Nación y los demás agentes del ministerio público, de oficio o a petición de cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia de los principios y fines de la contratación estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad.”*

*“ARTÍCULO 65. DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN CONTROL FISCAL. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales. (...)*

*[...]” (Negrita de la Sala)*

*Así las cosas, la interpretación armónica de las disposiciones del Estatuto de Contratación, permiten afirmar que el pronunciamiento que haga el organismo de control fiscal en virtud de lo señalado por el artículo 43 ejusdem, no constituye una decisión de fondo, sino que se trata de un acto de trámite, puesto que a partir de los hallazgos que advierta, pueden o no derivarse el inicio de las investigaciones de orden fiscal o disciplinario”.*

*“(...)”*

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

*Los otros requisitos formales exigidos por el legislador están presentes en el artículo 43 de la Ley 80 y se relacionan con el tema del control fiscal. **Así, después de celebrados los contratos que se originen en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviarán a la autoridad competente para realizar el control fiscal, con el objeto de que esta investigue si fue o no procedente su declaratoria, éste funcionario tendrá dos meses para pronunciarse.***

*A juicio de la Sala, **el ejercicio de este control implica la verificación de la ocurrencia de unos hechos, no el examen de las causas que los generaron. Así, si el órgano de control encuentra que los hechos que sirven de fundamento a la declaración de urgencia manifiesta si ocurrieron y que se ajustan a los presupuestos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, dicha declaración será conforme a derecho.*** Ahora bien, esta modalidad de control fiscal resulta de gran utilidad, ya que puede impulsar la realización de otras investigaciones de tipo penal o disciplinario.

*2.3. Para esta Sala, es importante señalar que la urgencia manifiesta, aunque implique la posibilidad legal para celebrar contratos de forma directa e inmediata, bajo ninguna circunstancia puede convertirse en una regla general o en un instrumento discrecional en manos de las autoridades públicas, todo lo contrario, su aplicación es de derecho estricto y procede previa configuración real y efectiva de las precisas causales que el legislador establece en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.*

*En conclusión, la contratación por la vía de urgencia no puede ser una contratación abusiva, contraria a los principios de la contratación estatal, es decir, se debe garantizar la transparencia, la selección objetiva, la debida ejecución del contrato y el cumplimiento de las finalidades del mismo, esto es, prestar un buen servicio público a los administrados.”*

*Por lo anterior, es oportuno recordarle a la primera autoridad municipal de San Pedro – Valle del Cauca, que si bien la contratación directa permite prescindir del procedimiento formal de la licitación pública, con todas las etapas y requisitos que ella exige, tal circunstancia no exime al administrador público del deber de efectuar una selección objetiva del contratista y de respetar los principios que regulan la contratación estatal como son los de transparencia, economía y responsabilidad, al lado de los principios de planeación, libre concurrencia, buena fe, y en general aquellos que rigen el ejercicio de la función administrativa.*

Como el número de contratos de prestación de servicios fue mayor, resulta oportuno referirnos a los mismo, pues en tratándose de este tipo de contratos en **Sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera**, Sentencia del 3 de diciembre de 2007. Rad. 24.715 y otros Acu. Cp.- Ruth Stella Correa Palacio concluyó:

*"... Las características de los contratos de prestación de servicios en cualquiera de sus modalidades a la luz del artículo 32 de la ley 80 de 1993 se caracterizan de la siguiente manera:" ... a). Podemos ser celebrados por cualquier entidad estatal que tenga capacidad para contratar, según lo previsto en el artículo 2 numeral 1. de la Ley 80 de 1993.*

*B). Es posible su celebración con personas naturales o con personas jurídicas. Con personas naturales cuando se trata de desarrollar actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad que no pueden desarrollar con personal de planta o requisitos específicos. Y, sin importar que la norma no lo señale, es conforme a derecho concluir que también es admisible suscribir este tipo de contratos con personas jurídicas, como así lo indica el artículo 24, numeral 1º, letra d), en el cual se señala la posibilidad de acudir a los mismos "[p] ara la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden abarcar a personas naturales o jurídicas (...)"*

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

*C). Tienen por objeto desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad contratante, con la condición de que ciertos actividades o funciones no pueden cumplir con el personal de la planta por ser insuficiente o porque se requieren conocimientos especialistas.*

*D). La relación que se genera entre entidad contratante y contratista no goza del carácter de relación laboral.*

*E). No pueden pactarse por plazo indefinido, sino por el plazo estrictamente necesario e indispensable (inciso 2°. Del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993).*

*Precisamente, la naturaleza excepcional de este negocio jurídico de la administración y las dos últimas características anotadas previenen que no se utilizará el contrato de prestación de servicios para establecer plantas paralelas con carácter permanente en las entidades públicas, en el desconocimiento del régimen laboral, tal y como lo ha publicitado esta Corporación al recalcar que no puede suplirse la vinculación de los servidores públicos a los cuadros del servicio oficial a través de estos contratos.*

*F). En el marco de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebran las entidades públicas – incluyendo los servicios de prestación de servicios- se rigen por las disposiciones civiles y comerciales que disciplinan el tipo negociable utilizado por la administración y las especialidades en dicho estatuto público contractual (artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993).*

*G). No son obligatorias las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilateral, de algún acuerdo a las leyes nacionales y de caducidad, salvo en materia de prestación de servicios públicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, pero no hay obstáculo para que si se estima conveniente se puedan pactar.*

*De otra parte, el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que en el ordinal 1° establece los precisos eventos en los que la escuela del contratista puede establecer directamente, en la letra d) señala como uno de ellos "la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden abarcar a personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas y tecnológicas. "De esta norma del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública puede colegirse que los únicos contratos de prestación de servicios que permiten ser celebrados en forma directa involucrados en estas actividades: i) los profesionales, esto es, los que se prestan por personas que ejercen especialmente una profesión; ii) las obras artísticas, es decir, relacionados con trabajos en las artes; y iii) las que manejan el desarrollo director de actividades científicas o tecnológicas.*

*Como puede apreciarse, el contrato de prestación de servicios, en las voces del artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, es una manera de vincular a los particulares para desarrollar actividades relacionadas con la administración y el funcionamiento de la entidad y si bien que involucren servicios profesionales o ejecución de trabajos artísticos o el desarrollo de actividades artísticas se subsumen en una causal de contratación directa..."*

Bajo la anterior referencia jurisprudencial, se tiene que los contratos DLS-PS045-20 de 20/03/2020; DLS-PS046-20 de 20/03/2020; DLS-PS047-20 de 24/03/2020 y DLS-PS048-20 de 26/03/2020, suscritos por prestación de servicios y su modalidad de contratación es la directa, nos referiremos a éstos de manera tangencial, indicando que estos se contrataron con el único objeto de: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA. (COVID 19)", con personas de las cuales no se aportó hojas de vida, ni documentos necesarios para la suscripción de un contrato estatal; El valor pactado por cada uno de los contratos es de \$3.440.00, con un plazo de ejecución de dos meses, siendo el

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

promedio mensual de \$1.720.000, sin los descuentos de Ley, un valor pagado por debajo de la tabla de valores de referencia fijados por la Gobernación del Valle a contratos de prestación de servicios con actividades asistenciales con vigencia para el 2020, y fijada mediante circular N°520726 de marzo 2020, donde los honorarios oscilan para este nivel entre \$1.650.000 y \$2.010.000 pesos dependiendo el grado de escolaridad.

También por prestación de servicios se suscribió el Contrato N° DLS-PS055-20 de 21/04/2020, con objeto contractual "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA", contrato que se desconoce el criterio para fijar los valores contratados por cada ítem, sin estudio del mercado ni cotizaciones que sigan de referencia.

Sobre estos contratos de prestación de servicios hay que decir inicialmente que debe tenerse cuidado a la hora de ser elaborados, pues en algunos hay inconsistencias entre los números y las letras respecto a las fechas de suscripción de algunos documentos, que muy posiblemente se deben al copy page, generando duda respecto de la fecha de elaboración.

Ahora bien, sobre la documentación enviada a este órgano de control se tiene que; no se aportó más documentación de la aquí referenciada, el criterio que se tuvo para la selección objetiva de los contratistas, su idoneidad o capacidad para desarrollar el objeto contractual, adolecen de una justificación o estudio previo, en contravía de los principios que rigen la administración pública, pero pese a que dichos contratos fueron planeados según consta en el Plan de Acción para atender la contingencia y que puede sustituir los estudios previos, hay otros requisitos que debe exigir el administrador municipal y que deberán ser verificados su cumplimiento por el GRI.

Respecto del contrato N° GSM- S052-20 del 3/04/2020 cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRUJILLO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA SOCIAL Y ECOLÓGICA CAUSADA POR EL COVID-19", a juicio de este Despacho pudo realizarse la contratación por invitación pública de mínima cuantía (en aplicación del Decreto 1082 de 2015), pues se trata de un proceso de selección de contratista, cuyo trámite es corto y donde el criterio para la selección es el menor precio, dando aplicación así al principio de selección objetiva que lo obliga, aunado a que juicio de este Despacho dicha compra no tiene relación directa para conjurar o prevenir el estado de emergencia o calamidad pública declarada por el COVID-19, se trata de equipos tecnológicos con destino la Alcaldía, pese a que se incluyó en el Plan de Acción ésta contratación no satisface los requerimientos de que trata el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

Como en los anteriores contratos, No se evidencia cual fue el criterio que tuvo la administración municipal para seleccionar el contratista, como el valor a contratar, pues no se aportó ni siquiera cotizaciones para esta compra, en el fondo estamos frente a un contrato de compra y no de suministro, reiteramos, este contrato no tiene una relación directa con la urgencia, pese a justificarse su contratación en este hecho, no puede argumentarse que la adquisición de equipos de cómputo, servirían para contener, mitigar o prevenir el virus, esta necesidad, motivo por el cual este contrato no pasa el examen que hace este órgano de control a la contratación suscrita por urgencia manifiesta y tendrá concepto desfavorable.

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y  
URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  
(JUNIO 18 DE 2020)**

Ahora bien, los demás contratos suscritos en el marco de la urgencia y calamidad podemos decir guardan relación directa con la urgencia, y se afectó el presupuesto propio del municipio de acuerdo a lo consignado en cada uno de los contratos suscritos donde se relacionó las disponibilidades presupuestales expedidas para respaldar ésta contratación.

Ahora bien, resulta preciso recordarle a la primera autoridad municipal de Trujillo – Valle del Cauca, que si bien la contratación directa permite prescindir del procedimiento formal de la licitación pública, con todas las etapas y requisitos que ella exige, tal circunstancia no exime al administrador público del deber de efectuar una selección objetiva del contratista y de respetar los principios que regulan la contratación estatal como son los de transparencia, economía y responsabilidad, al lado de los principios de planeación, libre concurrencia, buena fe, y en general aquellos que rigen el ejercicio de la función administrativa.

Así las cosas, el estudio realizado y la prueba de los hechos aportados a este ente de control permite evidenciar que la primera autoridad municipal contó con los criterios suficientes para sustentar un concepto favorable frente a los contratos *DLS-PS045-20 de 20/03/2020; DLS-PS046-20 de 20/03/2020; DLS-PS047-20 de 24/03/2020 y DLS-PS048-20 de 26/03/2020 y N° DLS-PS055-20 del 21/04/2020*, que se encontraban proyectados en el plan de Acción Específico realizado para atender la calamidad y como quiera que comportan características de inmediatez, como lo presupone el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 7 del Decreto 440 de 2020, que reza:

*“Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud . Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente”.*

Teniendo en cuenta que el grupo de trabajo 2 estará dirigido a ejercer el control y seguimiento a la contratación efectuada como consecuencia de la declaratoria de urgencia manifiesta y/o calamidad pública efectuada por los sujetos de control, teniendo la facultad de poder solicitar todos los documentos soportes de la contratación y hacer la respectiva visita fiscal.

Por lo cual considera este Despacho, se hace necesario que esta contratación se traslade al GRUPO DE REACCION INMEDIATA (GRI) EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS CON RELACION AL COVID 19, conformado mediante Resolución N°006 de abril 16 de 2020 para que haga una auditoria en la verificación de la ejecución de estos contratos, pese a dársele concepto favorable al pronunciamiento de urgencia, con la finalidad de hacer un estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios asociados a cada proceso de contratación, adicional a lo anterior efectuar un seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendadas al contratista, en el marco de la emergencia.

Resulta así preciso recordarle a la primera autoridad municipal de Trujillo – Valle del Cauca, que si bien la contratación directa permite prescindir del procedimiento formal de la licitación pública, con todas las etapas y requisitos que ella exige, tal circunstancia no exime al



120.08.03

**PRONUNCIAMIENTO N°036-2020 A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO (JUNIO 18 DE 2020)**

administrador público del deber de efectuar una selección objetiva del contratista y de respetar los principios que regulan la contratación estatal como son los de transparencia, economía y responsabilidad, al lado de los principios de planeación, libre concurrencia, buena fe, y en general aquellos que rigen el ejercicio de la función administrativa.

Igualmente se le recuerda al municipio que el decreto nacional expedido en el marco de esta emergencia es de carácter transitorio, por lo tanto y para próximas eventualidades se recomienda que se expida por cuenta del municipio su propio acto administrativo de declaratoria de urgencia manifiesta, tal y como lo consagra la Ley 80 de 1993.

**V. CONCEPTO**

Con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de este documento, por satisfacer los presupuestos que para la declaratoria de Calamidad y Urgencia Manifiesta que exige la Ley 80 de 1993, Ley 1523 de 2012 y la Ley 1150 de 2007 respectivamente, en razón a la circunstancia que presidieron su declaratoria y la celebración e iniciación de los contratos fruto de tal declaratoria, este organismo de control con fundamento en el Art. 43 de la Ley 80 de 1993 emite el siguiente concepto:

**PRIMERO:** Concepto **FAVORABLE** en la utilización de esta figura excepcional que motivó el acto administrativo mediante el cual fue declarada la Calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta, respecto de los hechos y circunstancias que determinaron la declaración y de los contratos suscritos; respecto de los contratos DLS-PS045-20 de 20/03/2020; DLS-PS046-20 de 20/03/2020; DLS-PS047-20 de 24/03/2020 y DLS-PS048-20 de 26/03/2020 y N° DLS-PS055-20 del 21/04/2020, por cuanto se ajustan a los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo expuesto en los considerandos. **DESAVORABLE:** El Contrato N° GSM- S052-20 del 3/04/2020 porque su objeto no comporta lo reglado en el artículo 42 de la Ley 80 de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este pronunciamiento.

**SEGUNDO: COMPULSAR** copia del presente pronunciamiento a la Procuraduría General de la Nación, conforme lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 80 de 1993.

**TERCERO:** En cumplimiento a lo consignado en la parte considerativa de este pronunciamiento, se debe **ENVIAR** la contratación realizada en el marco de la presente Calamidad y Urgencia Manifiesta, al Grupo dos de trabajo de Reacción Inmediata de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca (GRI), conformado mediante la Resolución Reglamentaria N°006 del 16 de abril de 2020, para lo de su competencia

**CUARTO:** El anterior concepto se emite sin perjuicio a que esta Contraloría en el ejercicio del control fiscal constitucional, pueda ejercer vigilancia a través de los respectivos funcionarios, en ejercicio del Control Posterior a los contratos objeto de este estudio y los que se lleguen a suscribir, en la línea de legalidad y gestión, que complementa el procedimiento de vigilancia fiscal, tal como lo precisó el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de marzo 24 de 1995, Rad.677, Consejero Ponente Luis Camilo Osorio.

**LEONOR ABADIA BENITEZ**  
Contralor Departamental del Valle del Cauca

**CLAUDIA JOHANA LUNA GIRALDO**  
Jefe Oficina Jurídica

	Nombre	Cargo	Firma
<b>Proyectó</b>	Rosa Liliana Ogonaga Antury	Profesional Universitario.	
<b>Revisó</b>	Claudia Johana Luna Giraldo	Jefe Oficina Jurídica	
<b>Aprobó</b>	Leonor Abadia Benitez	Contralora Departamental del Valle del Cuaca	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			